

Derecho eclesiástico español

Jorge OTADUY

Profesor Ordinario de Derecho Eclesiástico
Facultad de Derecho Canónico. Universidad de Navarra
jorotaduy@unav.es

SUMARIO: 1. Objeción de conciencia. 1.1. *Objeción de conciencia a la práctica del aborto*. 1.2. *Objeción de conciencia a tratamientos médicos*. 1.3. *Objeción de conciencia a cursar la asignatura de Educación para la ciudadanía*. 2. Símbolos religiosos. 2.1. *La Cruz de la Muela*. 2.2. *Uso del velo islámico*. 3. Lugares de culto. 3.1. *Modificación de normas urbanísticas referentes a la implantación de centros de culto*. 3.2. *Inmatriculación de templos de la Iglesia católica*. 4. Cuestiones fiscales. 4.1. *Impuesto sobre Bienes Inmuebles*. 4.2. *Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras*. 4.3. *Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos*. 5. Libertad de enseñanza. 5.1. *Derecho al concierto y necesidades de escolarización*. 5.2. *Derecho al concierto y enseñanza diferenciada*. 5.3. *Derecho de los padres a la elección de centro y régimen de admisión*. 6. Profesores de religión. 6.1. *Aspectos relativos a derechos fundamentales*. 6.2. *Aspectos retributivos: sexenios*. 6.3. *La no propuesta por parte del Ordinario no es un despido*. 6.4. *Idoneidad de la enseñanza de la Religión para ser valorada como mérito académico*. 6.5. *Reducción de jornada*. 7. Libertad religiosa e ideológica. 7.1. *Conflicto entre libertad de expresión y libertad religiosa*. 7.2. *Despido en una empresa de tendencia*. 7.3. *Abandono del Instituto religioso y reclamación laboral*. 8. Matrimonio. 8.1. *Matrimonio islámico y evangélico*. 8.2. *Matrimonio de conveniencia*. 9. Cuestiones penales. 10. Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

1. OBJECCIÓN DE CONCIENCIA

1.1. *Objeción de conciencia a la práctica del aborto*

La Sentencia 151/2014 de 25 septiembre, del Pleno del Tribunal Constitucional (RTC 2014 151), resuelve el recurso de inconstitucionalidad promovido contra la Ley Foral 16/2010, de 8 de noviembre, por la que se crea en Navarra el Registro de profesionales en relación con la interrupción voluntaria del embarazo.

Dicha competencia –al parecer del Tribunal– «no está sometida a reserva de ley orgánica, no invade las bases estatales en materia de sanidad, no afecta a las condiciones básicas que han de garantizar la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos, y su existencia no implica, *per se*, un límite al ejercicio del derecho a la objeción de conciencia recogido en el art. 19.2 L.O. 2/2010, ni un sacrificio desproporcionado e injustificado de los derechos a la libertad ideológica e intimidad».

Resulta razonable –continúa la sentencia– que la Ley Foral prevea que pueden acceder al Registro las personas titulares de la Dirección del Centro, de las direcciones médicas y de las direcciones de enfermería de los hospitales del Servicio Navarro de Salud, pero declara inconstitucional la previsión según la cual «también pueden acceder a los datos del Registro aquellas personas “que autorice expresamente la persona titular de la Gerencia del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, en ejercicio legítimo de sus funciones”, pues tal previsión faculta un nuevo acceso, posesión y uso de los datos personales que contiene el Registro en unos términos tan abiertos e indeterminados que supone un límite injustificado en el contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal (art. 18.4 CE)».

En Voto particular discrepante se argumenta acerca de la falta de necesidad de este Registro para garantizar la prestación a la que se refiere la Ley. «Bastaría con que en cada centro sanitario se contara con fichero que recogiera, en los términos legalmente previstos, la posible condición de objetor de los profesionales vinculados al correspondiente servicio». El magistrado contrario al parecer de la mayoría entiende que tal instrumento introduce un límite para el ejercicio del derecho constitucional a la objeción de conciencia y que la doctrina del Tribunal considera inconstitucional cualquier medida que genere un «efecto desalentador» o «disuasorio» del ejercicio de derechos constitucionales.

Concluye afirmando que «la creación del registro de profesionales sanitarios en relación con la interrupción voluntaria del embarazo en Navarra no supera el juicio de proporcionalidad constitucionalmente exigible sobre la relación existente entre la medida adoptada, el resultado producido y la finalidad pretendida. En efecto, la creación de un registro no es necesaria para garantizar a las usuarias del Sistema Navarro de Salud la prestación sanitaria de interrupción del embarazo, que parece ser la finalidad pretendida por el legislador navarro, según se infiere de la exposición de motivos de la Ley Foral. Ese objetivo puede ser cumplido con igual eficacia sin necesidad de crear un registro; así lo prueba el hecho mismo de que no haya sido creado en otras Comunidades Autónomas con un sistema sanitario más complejo, o la propia inoperancia del registro navarro. El resultado producido por una medida tal, pese a su temporal fracaso en Navarra, denuncia que implica un sacrificio injustificado del derecho fundamental a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios del sistema público de salud navarro, dado el efecto desalentador del ejercicio del derecho, ante el explicable temor de los profesionales a sufrir represalias y perjuicios en sus legítimas expectativas profesionales».

1.2. *Objeción de conciencia a tratamientos médicos*

El traslado del demandante a otro centro sanitario, respetando sus creencias religiosas, al no disponer el Hospital de Unidad de cirugía sin sangre que permita la realización de intervenciones quirúrgicas sin la utilización de sangre o hemoderivados, fue la conducta adecuada a la *lex artis* que rige la práctica médica¹. No se aprecia vulneración de los artículos 14 y 16 de la Constitución Española. «Dicho artículo 14, con claras conexiones con el también citado artículo 16, reconoce el derecho a no sufrir discriminaciones, pero no el hipotético derecho a imponer o exigir diferencias de trato (STC 52/1987)».

En supuesto conocido por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, se alega lesión del derecho fundamental a la libertad religiosa porque el facultativo responsable del tratamiento no permitió al apelante introducir en el documento de consentimiento informado una cláusula de conciencia de na-

¹ Tribunal Superior de Justicia de Comunidad Valenciana (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5ª) Sentencia de 7 de mayo (JUR 2014 202312).

turalidad religiosa contraria a la transfusión de sangre². No es en el documento que plasma el consentimiento informado donde se debe recoger una eventual cláusula de conciencia sino más bien en las denominadas «instrucciones previas», que en ese caso ya recogían la oposición del apelante a una transfusión sanguínea. El paciente fue informado por el facultativo responsable de su tratamiento de que la intervención quirúrgica podía demandar una transfusión y ante ello, haciendo valer precisamente esas instrucciones, no prestó el consentimiento informado. Ante la negativa y como la situación no demandaba urgencia, no constando por otro lado acreditado en autos otra posibilidad eficaz de tratamiento terapéutico alternativo o paliativo, la única salida legalmente posible no podía ser otra más que dar el alta al paciente.

En los autos conocidos por el Juzgado de Instrucción de Guadalajara se da cuenta de la conversación personal del magistrado con el paciente en el Hospital, en la que este último expuso de forma categórica y con detalle la decisión meditada, firme e inequívoca de no admitir que se le realice transfusión de sangre alguna pese a la información adecuada que le permitía valorar la situación recibida por los facultativos en el sentido de que su decisión podría causarle la muerte³. El paciente se encontraba en pleno uso de sus facultades cognitivas y volitivas. Entiende el magistrado que la ponderación de todas las circunstancias concurrentes en el caso conduce a la conclusión de que «la decisión del paciente de no prestar su consentimiento (...) a la transfusión de sangre debe respetarse, no hallándonos ante ninguno de los supuestos que la ley establece como excepciones al consentimiento, como son las situaciones en que exista riesgo para la salud pública y las de riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del enfermo en que no resulte posible conseguir la autorización de éste o de sus familiares».

1.3. *Objeción de conciencia a cursar la asignatura de Educación para la ciudadanía*

El Tribunal Constitucional ha resuelto durante el año 2014 varios recursos de amparo en los que se solicitaba la tutela del derecho a la libertad religiosa e ideológica y, por extensión, del derecho de los padres a proporcionar a

² Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Valladolid (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª) Sentencia de 26 de junio (RJCA 2014 611).

³ Juzgado de Instrucción de Guadalajara Auto de 8 de noviembre de 2014 (JUR 2015 57148).

los hijos una formación que esté de acuerdo con sus propias convicciones, en relación con la asignatura educación para la ciudadanía.

El Tribunal ha negado el amparo solicitado por apreciación de diversos óbices procesales, sin entrar en el fondo de la cuestión sobre la que tomó postura el Tribunal Supremo en 2009, que continúa a la espera de un eventual pronunciamiento del máximo intérprete de la Constitución.

En la Sentencia de 24 de febrero se sostiene que la recurrente carecía de interés legítimo, por cuanto pretendía la utilización del recurso de amparo como una acción contra una lesión de derechos meramente eventual o potencial, no como una reacción frente a una vulneración de los derechos real⁴.

El hijo menor de la recurrente, en efecto, no era destinatario del deber cuya objeción se interesaba, por cuanto en razón de su edad aún no le correspondía cursar la asignatura de Educación para la ciudadanía. Así pues, «no es posible ostentar un interés legítimo a recibir amparo frente a lesiones eventuales o futuras de los derechos fundamentales por el mero hecho de haber ostentado la condición de parte en un proceso». Concluye la Sala su razonamiento afirmando que «no cabe considerar el recurso de amparo como un mecanismo *ad cautelam* para la tutela de los derechos fundamentales, pues constituye reiterada doctrina constitucional que el recurso de amparo no tiene carácter cautelar, ni alcanza a proteger eventuales lesiones no producidas».

En recurso resuelto por Sentencia de 24 de marzo se alega –en relación con la misma materia– que la resolución del Tribunal Supremo impugnada no habría dado respuesta a la auténtica cuestión planteada en el proceso, pues se limitó a remitirse a sus Sentencias de 11 de febrero de 2009, considerando que el recurso objeto de las presentes actuaciones estaba planteado en términos sustancialmente idénticos a aquellos precedentes⁵. Con esa respuesta genérica, no individualizada, el Alto Tribunal habría soslayado que no cabe excluir de raíz –cuando se den circunstancias excepcionales– un derecho a quedar eximido del cumplimiento de algún deber jurídico válido. Del mismo modo, reprochaban a la Sentencia recurrida un defecto en la identificación del objeto procesal. Lo que defendían no era la existencia de un derecho a la objeción de conciencia, sino la vulneración del derecho fundamental que les asistía como padres (art. 27.3 CE) a elegir la educación moral de sus hijos conforme a sus convicciones.

⁴ Tribunal Constitucional (Sala Primera) Sentencia 28/2014 de 24 de febrero (RTC 2014 28).

⁵ Tribunal Constitucional Sentencia 41/2014 de 24 de marzo (RTC 2014 41).

Los demandantes de amparo, sin embargo, considerando los déficits de la Sentencia, debieron acudir al incidente de nulidad de actuaciones del art. 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, remedio procesal que podría haber dado lugar a la reparación de la lesión de incongruencia denunciada y de la pretendida vulneración que invocaban en cuanto a la resolución del fondo del asunto. Por consiguiente, no se dio el debido cumplimiento al requisito del agotamiento de los recursos establecido en el art. 44.1 a) LOTC, razón que condujo a la apreciación de dicho óbice y a reiterar la inadmisibilidad del recurso de amparo.

2. SÍMBOLOS RELIGIOSOS

2.1. *La Cruz de la Muela*

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dictó Sentencia desestimatoria del recurso contencioso en el que se alegaba que la presencia de la Cruz de la Muela en suelo público, en la localidad de Orihuela, era contrario a la aconfesionalidad del Estado⁶.

El Tribunal Supremo confirma la decisión⁷. La aconfesionalidad del Estado español y de sus instituciones, que proclama el artículo 16.3 de la CE, «implica una obligación de neutralidad, pero no supone una total incomunicación entre los poderes públicos y las diversas confesiones religiosas especialmente la Católica». Es idéntica doctrina a la establecida en sentencia de 4 de marzo de 2013 ante una pretensión de retirada del símbolo religioso denominado «Cristo de Monteagudo»⁸.

«La Cruz de la Muela forma parte, no sólo ya de la simbología religiosa tradicional de la población alicantina de Orihuela –sostiene la Sala del Supremo– sino además de su propia fisonomía cultural, porque así lo ha querido el consenso social, que no sólo se remonta, como pretende la parte actora, a una etapa predemocrática anterior a la Constitución de 1978, sino que sus orígenes son muy anteriores, situados concretamente en el año 1411. Todo ello

⁶ Se trata de la emanada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 5ª) Sentencia de 6 de septiembre (RJCA 2011 767). Me ocupé de ella en la crónica de jurisprudencia de 2011, publicada en *Ius Canonicum* 52 (2012) 310-311.

⁷ Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7ª) Sentencia de 2 de diciembre de 2014 (RJ 2014 6245).

⁸ Puede encontrarse la referencia al caso en *Ius Canonicum* 54 (2014) 352-353.

aunque la cruz actual no sea la original, lo que, en cualquier caso, revela su arraigo popular durante más de seiscientos años y su incardinación dentro de la propia tradición cultural y social de Orihuela y de su patrimonio histórico religioso cultural».

Además, no basta un planteamiento subjetivo del principio constitucional de aconfesionalidad del Estado para entender que la presencia de un símbolo religioso pueda vulnerar el derecho subjetivo a la libertad religiosa, sobre todo aquéllos que son verdaderos signos identitarios y resultado de una convención social, fruto del consenso colectivo.

2.2. *Uso del velo islámico*

Se recurre contra la sanción de cambio de centro impuesta a una menor como consecuencia del expediente disciplinario instruido tras el incumplimiento de una de las obligaciones recogidas en el Reglamento de Régimen Interior del Instituto, consistente en la prohibición del uso del *hiyab* por parte de las alumnas⁹.

La Sala hace una remisión amplia a los fundamentos jurídicos de la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de febrero de 2013, en la que el Alto Tribunal afrontó por vez primera el uso del velo islámico en relación con la libertad religiosa¹⁰. El objeto del recurso de casación era la impugnación de la Sentencia de la Sección 2ª de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 14 de junio de 2011, que desestimó el recurso interpuesto por la Asociación Watani por la Libertad y la Justicia contra el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Lleida de 8 de octubre de 2010, por el que se aprobó la modificación de ciertas Ordenanzas y Reglamentos. La referida sentencia del Tribunal Supremo de 2013 contiene una meritoria síntesis de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre los límites de los derechos fundamentales –y de la libertad religiosa en particular– e interpreta con hondura y acierto –a mi parecer– la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en aspectos relativos a la neutralidad del Estado en materia religiosa.

La Sala del Tribunal Superior Castellano-Leonés –en la sentencia a la que ahora me refiero– asume la doctrina, si bien considera que el supuesto que

⁹ Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Burgos (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª) Sentencia de 28 de noviembre (JUR 2015 32685).

¹⁰ Doy cuenta de esa sentencia en *Ius Canonicum* 54 (2014) 350-352.

se le presenta no se ajusta al conocido por el Alto Tribunal. La circunstancia de producirse ahora la controversia en el marco educativo obliga a proyectar el análisis hacia la conciliación entre la libertad religiosa y la libertad de enseñanza.

No se cuestiona que el respeto a la diversidad ideológica y de religión forma parte de la educación integral que constituye la finalidad del sistema educativo, si bien ese reconocimiento ha de resultar compatible con el respeto a la libertad de educación y de enseñanza, entendida desde el aspecto de la facultad del centro educativo para fijar unas directrices en esas materias. La libertad de organización «se erige como fundamento de la libertad de elección de centro que el ordenamiento garantiza, así como también de la facultad que asiste a los propios centros para establecer libremente y exigir el cumplimiento de un determinado régimen de convivencia, siempre dentro, naturalmente, de los parámetros del artículo 27 de la Constitución».

«El alumno, y sus padres –en definitiva–, al acudir a obtener la formación a un concreto centro asumen la obligación de respetar el régimen interno de este centro, y si consideran que este régimen interno que impone una determinada normativa de comportamiento no se ajusta al concepto de dignidad y al concepto religioso que procesa el alumno, tiene el derecho y la posibilidad de optar por otro centro que reúna y permita esta ideología religiosa (...) pero lo que no puede en ningún caso pretender el alumno o sus padres es que se cambie la normativa del centro, que se ajusta, conforme a la Constitución, a sus parámetros de libertad de enseñanza, para permitir el reconocimiento de esta dignidad alegada y de esta libertad religiosa, si con ello se atenta a la libertad de enseñanza y a los conceptos de libertad religiosa que puedan tener el resto de los alumnos que se han matriculado en el centro y han elegido este centro al poder observar lo que su normativa de régimen interno establece».

3. LUGARES DE CULTO

3.1. *Modificación de normas urbanísticas referentes a la implantación de centros de culto*

El Consejo Evangélico del País Vasco y la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España impugnaron el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Bilbao que aprobó definitivamente la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana, consistente en introducir en sus Nor-

mas Urbanísticas dos nuevos artículos referentes a la implantación de centros de culto¹¹.

Según los recurrentes, la normativa aprobada vulneraba el derecho a la libertad religiosa al limitar drásticamente la posibilidad de abrir lugares de culto mediante una norma reglamentaria de rango inferior a la ley, por tener un encubierto objetivo discriminatorio y no perseguir una finalidad legítima, al no haber dado justificación de la medida adoptada y menos haberla fundamentado en la protección del orden público y los derechos y libertades fundamentales de los demás. Señalaban, además, que la medida no era necesaria para garantizar la convivencia social. Se trataría, a su parecer, de una modificación del Plan General aprobada con carácter preventivo, en evitación de hipotéticas y futuras molestias a los residentes de los edificios.

No tiene la Sala necesidad de entrar en el fondo. Estima el recurso y se declara la nulidad de la modificación normativa por un defecto formal. No se observaron, en efecto, las exigencias derivadas del art. 108 de la Ley del Suelo y Urbanismo en cuanto a la necesidad de cumplir las pautas del programa de participación ciudadana en relación con la modificación del Plan General. Ciertamente, «corresponde al Ayuntamiento, en el marco diseñado por dicho precepto y en atención a las concretas circunstancias del caso, formular un programa de participación ciudadana con la dimensión y alcance suficientes para facilitar la participación ciudadana, pero lo que en modo alguno cabe aceptar es que dicho margen de apreciación discrecional sobre el alcance del programa incluya la opción de no realizar programa alguno, ya que la misma contradice claramente la norma en una cuestión que no resulta meramente formal, sino que tiene un alcance de máxima relevancia, de forma que el incumplimiento de dicho deber legal comporta la nulidad del procedimiento de elaboración por infracción del art. 108 LSU».

Suerte distinta corrió el recurso presentado por la Comisión Islámica de España contra el mismo acuerdo de 25 de septiembre de 2013 del Ayuntamiento de Bilbao de aprobación definitiva de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana, consistente en introducir en sus normas urbanísticas dos nuevos artículos referentes a la implantación de centros de culto¹².

¹¹ Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª) Sentencia de 17 de noviembre de 2014 (RJCA 2014 1057).

¹² Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª) Sentencia de 27 de junio de 2014 (JUR 2014 181219).

La entidad religiosa recurrente impugna tales preceptos por la razón de que excluye la implantación de nuevos centros de culto en locales de edificios que tengan por uso principal el residencial, razonando que «esta limitación de implantar centros de culto en los locales de viviendas colectivas puede suponer una restricción de implantación de centros de culto en más del 50% de los edificios de Bilbao y en un 88% de los edificios respecto de la situación previamente existente».

Argumenta la Sala que el establecimiento de dicha ordenación «resulta obligada para el planificador por razones de interés general, siendo ajeno a la regulación del ejercicio de los derechos a la libertad religiosa o a la libertad de enseñanza, pues aunque ambos comportan el derecho a la creación de los centros de culto o de enseñanza, ello no significa que pueda hacerse al margen de la ordenación urbanística». Incidiría negativamente esa regulación en el ejercicio del derecho de libertad religiosa si la concreta ordenación resultara lesiva de tales derechos «por ser desproporcionadamente restrictiva o por tener un efecto equivalente a una auténtica limitación del ejercicio del derecho fundamental. El planeamiento ha de posibilitar el ejercicio del derecho a la libertad religiosa en términos razonables y no discriminatorios, de acuerdo con las necesidades que se pongan de manifiesto por las entidades religiosas».

La desestimación del recurso se funda sobre la falta de desarrollo de la carga alegatoria por la parte actora así como por la ausencia de actividad probatoria mínima al respecto.

En el caso de la modificación del plan general de ordenación urbanística por el que se aprobó el Plan Parcial de Reforma Interior (Cornisa de San Francisco-Seminario), establecido mediante el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid de 2009, el Tribunal Supremo ha rechazado un segundo recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento y el Arzobispado de Madrid¹³. La impugnación de la Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 3 de febrero de 2011 (RJCA 2011 404) no pudo prosperar por falta de subsanación de las deficiencias relativas al cumplimiento de las exigencias de patrimonio histórico-artístico¹⁴.

¹³ Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5ª) Sentencia de 10 de enero de 2014 (RJ 2014 1261).

¹⁴ Sobre los antecedentes del caso puede consultarse esta misma sección del pasado año. *Ius Canonicum* 54 (2014) 358-359.

3.2. *Inmatriculación de templos de la Iglesia católica*

Se han producido algunas resoluciones sobre la titularidad canónica de templos destinados al culto católico.

La Iglesia, a través de las diversas instituciones o personas jurídicas que la integran, es la titular originaria de la Ermita en disputa. Esta circunstancia queda acreditada por la notoriedad, que deriva de estar destinada al culto católico desde el inicio hasta la actualidad, así como de actos reveladores del dominio por parte de la Parroquia de San Juan Bautista de Irañeta sobre la Ermita controvertida, que hacen presumir que no ha llegado a perder la posesión que legitimaría, en su caso, la adquisición derivativa del Ayuntamiento ¹⁵.

La notoriedad del titular se sigue de que «es difícil pensar que un templo erigido en Navarra en fecha no determinada en el proceso, pero en todo caso anterior al S. XVI (constancia documental), con la advocación particular a un Santo Católico (San Gregorio), dedicada al culto católico desde el origen y de forma continuada, aunque no permanente, y hasta la actualidad, no pertenezca en origen a la Iglesia Católica. Todo ello, sin perjuicio de que se acredite lo contrario por quien discuta esta titularidad dominical».

Concluye la Sala que, ciertamente, la parte actora «no aporta justificación documental de dominio (documento público o privado), ni goza el mismo de la publicidad que da la inscripción registral; no obstante, acreditado el destino de la Ermita, y atendiendo a las circunstancias concurrentes, en particular, a la antigüedad de la edificación, al carácter originario de su adquisición, y a la prohibición de acceso al Registro de la Propiedad hasta el año 1998, convertiría en diabólica la exigencia de probar documentalmente el dominio sobre ella».

También se localiza en Navarra el siguiente caso, en el que el Ayuntamiento ejerció acción declarativa de dominio y la correspondiente acción de nulidad registral, interesándose la declaración de su condición de propietario del templo parroquial ¹⁶. Se interesó asimismo la nulidad de la inscripción registral en la que la Diócesis de Pamplona procedió en 2003 a inscribir a su nombre el templo parroquial. El recurso de apelación resultó desestimado.

¹⁵ Audiencia Provincial de Navarra (Sección 2ª) Sentencia de 26 de febrero de 2014 (JUR 2014 89079).

¹⁶ Audiencia Provincial de Navarra (Sección 1ª) Sentencia de 29 de abril de 2014 (JUR 2014 190376).

Según el parecer de la Sala, la Diócesis de Pamplona y su Obispo «además de poseer justo título han tenido durante más de nueve siglos la quieta y pacífica posesión de la misma, pues siempre los vicarios han tenido llaves sin que nadie haya discutido la posesión de buena fe, habiendo recibido el Obispo de Pamplona los frutos de la Iglesia, es decir, el producto de los diezmos, mientras que las primicias se dedicaban a la conservación del templo, sin que nada de ellas fuera a parar a manos del Ayuntamiento de la Villa».

Asimismo «debe tenerse en cuenta que la Diócesis de Pamplona mediante inmatriculación goza de una inscripción registral efectuada conforme a lo establecido en el artículo 206 de la Ley Hipotecaria, llevada a cabo el 26 de septiembre de 2003, por lo tanto esta inscripción conforme preceptúa el artículo 207 del citado texto legal surtía ya efecto respecto de terceros cuando se interpuso la demanda el 20 de mayo de 2011. La presunción *iuris tantum* que establece el artículo 38 de la Ley Hipotecaria derivada de la publicidad registral, debe ser por tanto desvirtuada frente a quien es el titular registral, si bien como se ha expuesto inicialmente la parte demandada en este procedimiento no tiene la carga de acreditar su titularidad».

Tampoco, finalmente, puede considerarse que el templo sea de dominio público, ya que como se ha expuesto, no se ha acreditado tal condición.

En un tercer caso, sin embargo, la diócesis demandante «no acreditó con la pertinente documentación, según el carácter histórico que en cierto modo presenta, que la ermita le fuera devuelta en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley derogatoria de las desamortizaciones practicadas ni tampoco ha demostrado el ejercicio en momento alguno de actos posesorios a título de dueño sobre la misma»¹⁷.

Por el contrario, «los documentos aportados por la demandada justifican una atención constante sobre el edificio acometiendo actos continuos que sólo son posibles con la atribución de carácter de dueño (...) actos que se remontan a la segunda mitad del siglo XIX y que se reiteran y repiten con carácter continuo (...) que en modo alguno son desvirtuados por prueba o alegación alguna de la demandante, a quien en ejercicio de la acción declarativa interpuesta correspondía acreditar la prueba indubitada, firmemente constatada, de la propiedad del bien reivindicado».

¹⁷ Audiencia Provincial de Zaragoza (Sección 5ª) Sentencia de 18 de febrero de 2014 (AC 2014 236).

En sentencia contra España, el TEDH ha cuestionado la viabilidad del procedimiento de inmatriculación de inmuebles previsto en el artículo 206 de la Ley Hipotecaria en favor de la Iglesia, que sería legítimo solo en caso de ausencia de inscripción registral previa. Declara que en el caso hubo violación del artículo 6.1 del Convenio (derecho a un proceso equitativo) así como del artículo 1 del protocolo adicional (protección de la propiedad)¹⁸. Se ha presentado recurso ante la Gran Sala.

3.3. *Licencia municipal de apertura*

En aplicación de la Ley autonómica de Cataluña 16/2009, de 22 de julio, de centros de culto, y del Decreto 94/2010, de 20 de julio, el lugar religioso de autos, no disponiendo de licencia municipal de actividades o equivalente, tiene que efectuar la comunicación de cumplimiento de las condiciones básicas de seguridad ante la Administración competente en el plazo de cinco años desde la entrada en vigor del reglamento¹⁹.

4. CUESTIONES FISCALES

4.1. *Impuesto sobre Bienes Inmuebles*

En el año 2006 se inició en España un movimiento de fuerte presión social en contra de la exención del IBI aplicado a la Iglesia católica, tal como se encuentra reconocido –como también para las restantes confesiones con Acuerdo de cooperación y las entidades sociales– en el ordenamiento vigente. A nadie se le oculta –a la vista del relevante patrimonio inmobiliario de la Iglesia– que la dispensa del pago del IBI es una cuestión de primera importancia.

A pesar del ruido ambiental generado por las campañas contra lo que en esos entornos suele denominarse «privilegios de la Iglesia», las resoluciones judiciales están siendo favorables a la exención del pago del impuesto²⁰. El

¹⁸ Tribunal Europeo de Derechos Humanos Caso contra (Sección 3ª) Caso Sociedad Anónima del Ucieza contra España. Sentencia de 4 de noviembre de 2014 (TEDH 2014 74).

¹⁹ Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª) Sentencia de 29 de octubre de 2014 (JUR 2015 15259).

²⁰ En estas crónicas anuales de jurisprudencia me hago eco habitualmente de esas resoluciones. Sin ánimo de exhaustividad, puedo citar las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 2 de febrero de 2012 (*Ius Canonicum* 53 [2013] 355-356) y del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Canarias, Las Palmas, de 15 de enero de 2010 (*Ius Canonicum* 51 [2011] 348-349).

parecer de los tribunales es congruente con la literalidad de la norma y, obviamente, con la realidad reconocida por esta: los inmuebles de la Iglesia no están al servicio de explotación económica alguna –mientras no se demuestre lo contrario– y girar el impuesto sobre ese patrimonio como si de entidad mercantil se tratara constituiría una medida completamente desproporcionada.

La más contundente agresión normativa en esta materia ha sido protagonizada por el Parlamento de Navarra que, con los votos del PSN-PSOE, –Izquierda-Ezkerra, Bildu y Aralar-NaBai, aprobó la Ley Foral 10/2013, de 12 de marzo, de reforma de la Ley de Haciendas locales, en el sentido de limitar la exención en la contribución territorial (equivalente al IBI en el resto del territorio nacional) en favor de los bienes de la Iglesia católica y de las confesiones religiosas no católicas con acuerdo, al supuesto de que «estén destinados al culto» [apartado 7 del artículo único, letra d].

El Pleno del Tribunal Constitucional (Sentencia 207/2013, de 5 de diciembre) declaró en 2013 la inconstitucionalidad y nulidad de la citada norma, por violación del art. 45.3 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de reintegración y mejoramiento del régimen foral de Navarra, en relación con el art. 2.1 c de la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, por la que se aprueba el convenio económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra²¹.

En 2014 se ha dictado una importante sentencia del Tribunal Supremo, en recurso en interés de ley sobre el alcance de la exención del IBI en favor de la Iglesia católica, que despeja cualquier duda²².

En la actualidad –según esta doctrina–, el régimen tributario de la Iglesia Católica respecto al Impuesto sobre Bienes Inmuebles es el siguiente:

1) Si se trata de entidades de la Iglesia Católica del artículo IV del Acuerdo sobre Asuntos Económicos entre el Estado Español y la Santa Sede, les resulta de aplicación la exención en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles prevista en el apartado 1 del art. 15 de la ley 49/2002 respecto a los inmuebles de que sean titulares catastrales y sujeto pasivo estas entidades, siempre que no estén afectos a explotaciones económicas y los que estén afectos a explotaciones económicas cuyas rentas se encuentren exentas del Impuesto sobre Sociedades en virtud del art. 7 de la ley 49/2002.

²¹ La crónica del caso en *Ius Canonicum* 54 (2014) 338-340.

²² Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª) Sentencia de 4 de abril de 2014 (RJ 2014 2488).

Además, por aplicación del Acuerdo sobre Asuntos Económicos entre el Estado Español y la Santa Sede, están exentos del IBI los inmuebles enumerados en la letra A) del artículo IV de dicho Acuerdo.

2) Si se trata de las asociaciones y entidades religiosas comprendidas en el artículo V del Acuerdo sobre Asuntos Económicos entre el Estado Español y la Santa Sede, y que se dediquen a actividades religiosas, benéficas o docentes, médicas u hospitalarias o de asistencia social, les será de aplicación la exención establecida en el art. 15 de la ley 49/2002 para las entidades sin fines lucrativos, siempre que cumplan los requisitos exigidos por la misma.

4.2. *Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras*

Aunque a la fecha de la firma del Acuerdo con la Santa Sede no existía el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) en el ordenamiento tributario español, una vez creada la figura impositiva se aplicó a alguno de los beneficios fiscales regulados en el Acuerdo.

La Orden del Ministerio de Hacienda de 5 de junio de 2001, en efecto, interpretó que la citada exención era aplicable al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, ya que las Sentencias del Tribunal Supremo de 17 de mayo de 1999; de 19 y 31 de marzo de 2001, esta última en recurso de casación en interés de ley, y de 3 de octubre de 2003, reconocieron el carácter real del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, al tiempo que determinaron que la Santa Sede, la Conferencia episcopal, las diócesis, las parroquias y otras circunscripciones territoriales, las órdenes y congregaciones religiosas y los institutos de vida consagrada y sus provincias y sus casas, disfrutaban de exención total y permanente en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

Mediante Orden EHA/2814/2009, de 15 octubre, sin embargo, se estimó necesaria la equiparación del contenido de la exención del IBI para la Iglesia Católica con el contenido de la exención del ICIO para las obras que se lleven a cabo en dichos inmuebles. Se justificó la medida aduciendo que no parecía lógico que en un inmueble no exento del IBI, por no tener como destino ninguno de los exigidos en la letra A) del apartado 1 del artículo IV del Acuerdo, las obras que en él se realicen sí gocen de exención en el ICIO, exención que se aplica conforme a lo dispuesto en la letra B) del apartado 1 del artículo IV del Acuerdo, por mor de la interpretación dada a la misma por la citada Orden del Ministerio de Hacienda de 5 de junio de 2001.

El Tribunal Supremo procede ahora a declarar la ilegalidad y a la anulación subsiguiente de la Orden EHA/2814/2009, de 15 octubre, que limitó la exención del impuesto aplicable a la Iglesia católica a los inmuebles que estuvieran exentos en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles²³.

A partir de ahora –ya de forma incuestionable– «ha de considerarse que todos los inmuebles exentos del IBI lo están también del ICIO, mientras que no puede afirmarse del mismo modo lo contrario, esto es, que todo inmueble exento de éste lo está también, necesariamente, de aquél. Y consecuentemente, al introducir el Ministerio de Hacienda a través de la Orden EHA/2814/2009, de 15 de octubre, la “interpretación” consistente en que la Santa Sede y demás entidades religiosas, disfrutarán de exención total y permanente en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras “para todos aquellos inmuebles que estén exentos de la Contribución Territorial Urbana (actualmente, Impuesto sobre Bienes Inmuebles)”, es claro, a juicio de la Sala, que incurre en un efecto real de innovación, como se denuncia, al restringir lo estipulado en el artículo IV, 1. B), del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede para Asuntos Económicos de 3 de enero de 1979, dado que limita la exención en él establecida, así como lo dispuesto en la Orden del propio Ministerio de Hacienda de 5 de junio de 2001, que aclara dicho Acuerdo».

4.3. *Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos*

La sentencia de instancia estimó la pretensión de la actora de anular la resolución del Ayuntamiento por la que se denegaba la aplicación de la exención sobre el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Apeló la entidad local sosteniendo que, en el caso de entidades religiosas, se exigía la prueba de que el inmueble cuya exención fiscal se pretende estuviera dedicado al culto. La entidad apelada era de las comprendidas en el ámbito subjetivo de aplicación del art. 5 del Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado español (es decir, las entidades religiosas distintas de la Santa Sede, Conferencia episcopal, diócesis, congregaciones, etc.), por lo que «tendrá derecho a los beneficios fiscales que el ordenamiento jurídico-tributario del Estado español prevé para las entidades sin fin de lucro y, en todo

²³ Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª) Sentencia de 19 de noviembre de 2014 (RJ 2014 5957).

caso, los que se conceden a las entidades benéficas privadas». Este es el previsto en el art. 15 Ley 49/2002, de 23 de diciembre, el cual en su apartado 3º establece una exención absoluta del IIVTNU cuando concurra, junto a la naturaleza de entidad sin ánimo de lucro, la condición de sujeto pasivo del impuesto y transmisión a título lucrativo sin otro requisito adicional.

«Tratándose de una transmisión lucrativa, sucesión, es sujeto pasivo –declara la Sala– la entidad a cuyo favor se constituye. El requisito adicional relativo al destino de los bienes, invocado por la apelante, únicamente es exigible en otros tributos (IBI) o bien en el caso del IIVTNU, tratándose de transmisiones onerosas efectuadas por la propia entidad, que no era el caso»²⁴.

5. LIBERTAD DE ENSEÑANZA

5.1. *Derecho al concierto y necesidades de escolarización*

La resolución administrativa impugnada denegó el otorgamiento de los conciertos educativos solicitados para el curso escolar 2011-2012 porque la convocatoria no contemplaba la solicitud de nuevos conciertos y porque los datos relativos a la escolarización de la zona no justificaban estas ayudas²⁵. Los tres establecimientos educativos, sin embargo, ya tenían reconocido el derecho al acceso o establecimiento del régimen de conciertos en el momento de resolverse el recurso contencioso sobre las peticiones de unidades concertadas para el curso 2011-2012. «No nos encontramos ante la petición del establecimiento –concluye la Sala– sino que se trata más bien de una renovación con modificaciones. Como quiera que los tres centros docentes titularidad de la entidad actora ya habían accedido al sistema de conciertos desde el curso 2007-2008, continuando cumpliendo los requisitos que determinaron este establecimiento de ayudas y satisfaciendo necesidades educativas, constituiría una discriminación intolerable sufragar mediante fondos públicos a unidades educativas de otros establecimientos escolares y no a esos tres colegios».

Además, el alegado incumplimiento del requisito de «satisfacer necesidades de escolarización» previsto en el Reglamento sobre normas básicas sobre

²⁴ Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ª) Sentencia de 12 de noviembre de 2014 (JUR 2015 31255).

²⁵ Tribunal Superior de Justicia de Islas Baleares (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª) Sentencia de 12 de febrero de 2014 (RJCA 2014 361).

conciertos educativos (Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre) adolece de una justificación suficiente y adecuada, por lo que el segundo motivo de impugnación debe ser también estimado.

5.2. *Derecho al concierto y enseñanza diferenciada*

Durante el año 2014 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha continuado manteniendo la tesis de que los centros privados de educación no mixta no pueden ostentar la condición de concertados sostenidos con fondos públicos²⁶.

Entiende la Sala que la prohibición de discriminación en la admisión de alumnos en centros públicos y privados concertados –contenida en el artículo 84.3 de la Ley 2/2006, de Educación– alcanza al hecho de escolarización separada de niños y niñas, aunque las circunstancias educativas sean las mismas, y que ello constituye un óbice insuperable para contar con ayudas públicas.

Hay Voto Particular discrepante, en el sentido de que «si la educación diferenciada fuese discriminatoria –expresión que ya encierra un matiz negativo– el problema no estaría en el acceso al régimen de conciertos, sino en si cabría tolerar un sistema docente contrario a la Constitución. De ser la respuesta negativa no sólo habría que excluir a los colegios de enseñanza diferenciada del sistema de conciertos, sino a los no concertados del mismo sistema educativo». Sin embargo, expresamente admite la Sala que «la educación diferenciada es tan legítima como el modelo de coeducación».

Se invoca asimismo, en contra de parecer mayoritario, la Convención de la UNESCO de 1960 relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, con valor interpretativo constitucional, a tenor del artículo 10.2 CE, que excluye expresamente de discriminación por razón de sexo «la creación o el mantenimiento de sistemas o establecimientos de enseñanza separados para los alumnos de sexo masculino y para los del sexo femenino, siempre que estos sistemas o establecimientos ofrezcan facilidades equivalentes en el acceso a la enseñanza, dispongan de un personal docente igualmente calificado, así como de locales escolares y de equipo de igual calidad y permitan seguir los mismos programas de estudio o programas equivalentes».

²⁶ Véase, por todas, Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ª) Sentencia de 23 de junio de 2014 (RJ 2014 3477).

5.3. *Derecho de los padres a la elección de centro y régimen de admisión*

El derecho de los padres a la elección de centro docente y a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones podría justificar, según los recurrentes, el aumento de la *ratio* de alumno por aula, como parte del derecho a la educación del art. 27 de la Constitución²⁷.

Responde la Sala negativamente, mediante invocación de doctrina legal establecida por sentencia del Tribunal Supremo de 30 de marzo de 2012, según la cual «no es posible el aumento judicial de la *ratio* para educación primaria en los centros escolares sostenidos con fondos públicos por encima del límite fijado por el art. 157.1 a) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, con fundamento en el derecho a la libre elección de centro escolar ni en el derecho de los padres a que los hijos reciban la educación moral y religiosa que esté acorde a sus propias convicciones».

No se puede considerar vulnerado el derecho a la elección de centro –concluye–, «pues ninguna cortapisa existe a que los padres puedan ejercitar ese derecho, siendo cosa distinta el que la elección pueda o no ser satisfecha, en función de la existencia o no de plazas, y para ello ha de procederse a la baremación de las solicitudes conforme a los criterios de admisión previamente establecidos y cuya procedencia en modo alguno se cuestiona».

6. PROFESORES DE RELIGIÓN

6.1. *Aspectos relativos a derechos fundamentales*

Según la profesora de religión recurrente en amparo, su no contratación por el Ministerio de Educación para prestar servicios en el curso 2002-2003 constituyó un despido por motivos extraprofesionales y vinculados al ejercicio de derechos fundamentales, tales como la participación en una huelga, la presentación de una demanda judicial de reconocimiento del carácter indefinido de la relación laboral, y el hecho de haber contraído matrimonio con un ciudadano previamente divorciado²⁸.

²⁷ Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sevilla (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª) Sentencia de 27 de febrero de 2014 (JUR 2014 102658).

²⁸ Tribunal Constitucional (Pleno) Sentencia 140/2014 de 11 de septiembre (RTC 2014 140).

El Pleno del Tribunal Constitucional, sin embargo, no encuentra, «un panorama indiciario suficiente de que la decisión de no contratar a la demandante de amparo un nuevo curso escolar estuviese conectada causalmente con el ejercicio por ésta de derechos fundamentales». Teniendo en cuenta las fechas en que se produjeron los hechos aludidos y la de las anteriores propuestas como docente, el parecer del Pleno es que todos ellos quedan reducidos a uno: el hecho de haber contraído la docente matrimonio civil con una persona divorciada, «que guarda relación –se dice– con el ejercicio colectivo de la libertad religiosa de la Iglesia católica, por lo que, llegado el caso, sería necesario ponderar la concurrencia de los distintos derechos fundamentales en presencia».

Ahora bien –continúa–, «el presupuesto de tal ponderación es la constatación de que tal hecho tuvo lugar y que guardó la conexión necesaria con la decisión omisiva enjuiciada en los términos en los que este Tribunal viene exigiéndolo reiteradamente». Sin embargo «la existencia de tal matrimonio en cuanto hecho indiciario; sus características contrarias a la ortodoxia católica y, consecuentemente, hábiles para fundar en su existencia una sospecha de discriminación; así como su conexión temporal con la decisión enjuiciada, carecen del más mínimo soporte en la resolución impugnada».

En suma, «la falta de acreditación de la existencia de indicios de discriminación en los términos en los que este Tribunal ha venido analizando la cuestión suscitada conduce a descartar que la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia aquí impugnada vulnerase los derechos fundamentales de la demandante. Todo ello hace innecesaria la ponderación de tal supuesto indicio con el derecho a la libertad religiosa de la Iglesia católica, ponderación en la que, a tenor de lo dispuesto por el art. 10.2 CE, habría de tomar en consideración la reciente STEDH de 12 de junio de 2014, dictada por la Gran Sala (*Fernández Martínez c. España*)».

El Magistrado Ollero comparte el fallo desestimatorio del amparo pero discrepa de su fundamentación. No comparte, en concreto, el tratamiento que la Sentencia concede a la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 12 de junio de 2014 en el caso *Fernández Martínez contra España*, que analiza en qué medida afecta a los derechos contemplados por el Convenio de Roma la retirada de la propuesta episcopal como profesor de religión de un ex sacerdote católico cuya conducta no cabía considerar acorde con la doctrina que había de impartir. La aludida resolución de la Gran Sala considera que la negativa episcopal a reiterar una propuesta como profesor de religión en escuela pública a un docente cuyo tenor de vida –legítimo en diverso contexto–

no era acorde con la materia a impartir, en modo alguno vulneraba sus derechos protegidos por el Convenio de Roma.

La Sentencia de la que se discrepa dedica una prolija argumentación a intentar establecer si los indicios de existencia de esa descartada vulneración han sido adecuadamente abordados por la jurisdicción ordinaria y olvida –al parecer del redactor del Voto– la prioridad de aplicación del canon de constitucionalidad sobre cualquier enjuiciamiento de legalidad. Si se respeta el canon de constitucionalidad, queda descartada toda posible vulneración.

Según el otro Voto Particular discrepante, del Magistrado Valdés Dal-Ré, «no cabe que un pronunciamiento constitucional altere el criterio del único órgano judicial que ha efectuado una valoración indiciaria no cuestionada en amparo, estimando la lesión aducida. Y eso es, en cambio, lo que ocurre en esta ocasión: se afirma que no hubo vulneración porque eran insuficientes los indicios, sin tener en cuenta que el único órgano judicial que se ocupó de ese particular, cuya sentencia no ha sido impugnada (el de instancia), y actuando con la debida inmediación, declaró que los había y que existió vulneración del derecho fundamental sustantivo que daba soporte a la pretensión».

El caso *Fernández Martínez contra España* analiza en qué medida afecta a los derechos contemplados por el Convenio de Roma la retirada de la propuesta episcopal como profesor de religión de un ex sacerdote católico cuya conducta no cabía considerar acorde con la doctrina que había de impartir²⁹.

La aludida resolución de la Gran Sala considera que la negativa episcopal a reiterar una propuesta como profesor de religión en escuela pública a un docente cuyo tenor de vida –legítimo en diverso contexto– no era acorde con la materia a impartir, en modo alguno vulneró sus derechos protegidos por el Convenio de Roma.

6.2. Aspectos retributivos: sexenios

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, mediante sentencia de 20 de junio de 2013, reconoció, en demanda de conflicto colectivo, el derecho de los profesores de religión de la Comunidad Autónoma de Madrid al devengo y a la retribución del complemento específico de formación permanente (sexenios), en las condiciones y cuantía que les corres-

²⁹ Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Gran Sala) Caso *Fernández Martínez contra España*. Sentencia de 12 de junio de 2014 (TEDH 2014 35).

ponda a los funcionarios interinos docentes. La Comunidad de Madrid no reconocía a los profesores de religión que prestan servicios en centros públicos ese complemento por no ser funcionarios de carrera.

Quien tenga noticia de la especificidad –o más bien anomalía– que viene arrastrando el régimen de los profesores de religión en la Comunidad de Madrid podrá adivinar la decisión del Tribunal Supremo, que no puede ser otra que la de confirmar la doctrina de la sentencia recurrida, «que no infringe los preceptos denunciados, pues teniendo los funcionarios interinos derecho al complemento de formación reclamado, también lo tienen los profesores de religión que prestan servicios en la Comunidad de Madrid en centros públicos, pues la Orden de la Consejería de Educación de la Comunidad que regula la formación permanente del profesorado, no hace distinción alguna en relación a los destinatarios de la misma ni en relación con el régimen del complemento»³⁰.

Como es sabido, el régimen jurídico retributivo de los profesores de religión en la Comunidad de Madrid, a pesar de la nueva regulación general como trabajadores por cuenta ajena, viene establecido por una norma administrativa que les reconoce unas retribuciones equiparables a las de los funcionarios docentes de carácter interino por lo que no existe razón alguna para negarles el derecho que reclaman. Con idéntico fundamento habían sido ya reconocidos ciertos derechos retributivos relativos a la antigüedad así como el complemento de tutoría³¹.

La solución no es igual en otras Comunidades Autónomas, como por ejemplo Asturias y Galicia.

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias, aun admitiendo que los profesores de religión se encuentran excluidos del ámbito de aplicación del V convenio colectivo para el personal laboral de la Administración del Principado y que les corresponde la equiparación retributiva al personal funcionario, niega el derecho al complemento específico de formación permanente (sexenios)³². «En definitiva, a los profesores de religión les corresponde percibir el complemento de antigüedad de la misma manera que lo perciben los funcionarios interinos, pero en modo alguno el complemento de formación perma-

³⁰ Tribunal Supremo (Sala de lo Social, Sección 1ª) Sentencia de 7 de julio de 2014 (RJ 2014 5103).

³¹ Una información más detallada sobre jurisprudencia relativa al profesado de Madrid puede encontrarse en las crónicas de años anteriores. *Ius Canonicum* 54 (2014) 342-345; *Ius Canonicum* 53 (2013) 343-347; *Ius Canonicum* 51 (2011) 338-339.

³² Entre otras en el mismo sentido, Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Sala de lo Social, Sección 1ª) Sentencia de 28 de marzo de 2014 (AS 2014 798).

nente o sexenios, que solamente se regula para los funcionarios de carrera, situación ésta en la que no se encuentran los funcionarios interinos, a los que se equiparan, a efectos retributivos y en ausencia de una regulación convencional propia, los profesores de religión».

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia, por su parte, llega a la misma conclusión³³. En ese caso, los profesores de religión que prestan servicios en Galicia, en cuanto personal laboral, se rigen por el Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio de la Comunidad Autónoma al no estar excluidos de su ámbito personal de aplicación. En ello se funda la Sala para no reconocer el derecho a percibir los sexenios en favor de los profesores de religión, vinculados por un contrato de trabajo de duración indefinida; cabría reconocer ese derecho a los funcionarios interinos en las mismas condiciones que a los funcionarios de carrera, pero tal equiparación de derechos no es extensible a los contratados en régimen laboral.

6.3. *La no propuesta por parte del Ordinario no es un despido*

La actora, designada profesora de religión católica conforme a lo previsto en el Acuerdo sobre enseñanza celebrado entre la Santa Sede y el Estado español, comunicó al obispo de la diócesis que había abandonado la Iglesia católica para pasar a pertenecer a la Iglesia evangélica, bautizándose en la misma y siendo miembro creyente de dicha Iglesia³⁴. Se comunicó a la actora la finalización de la relación con la diócesis y consiguientemente con la Consejería de Educación, como empleadora. El obispo dirigió asimismo comunicación a la Dirección General de Personal Docente de la Consejería, en la que manifestaba los hechos y hacía notar que, conforme al canon 804 § 2 y concordantes del Código de Derecho Canónico, no podía seguir impartiendo clases de Religión y Moral Católica, por lo que procedía a dejar sin efecto la propuesta que, al amparo del artículo III del Acuerdo sobre Enseñanza de 3 de enero de 1979, se presentó en su día a la Consejería de Educación y Cultura. «Al mismo tiempo –añadió–, se retira la misión canónica que en su día otorgó este obispado, como condición indispensable para impartir dicha enseñanza».

³³ Entre otras en el mismo sentido, Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Sala de lo Social, Sección 1ª) Sentencia de 20 de mayo de 2014 (AS 2014 1750).

³⁴ Tribunal Superior de Justicia de Islas Baleares (Sala de lo Social, Sección 1ª) Sentencia de 23 de septiembre de 2014 (AS 2014 2979).

La Consejería no dio curso inmediato a la petición del obispo por no haberse acreditado que el cambio de religión hubiese afectado al cumplimiento de las funciones de la actora y porque sería necesario revocar la declaración de idoneidad, dar audiencia a la actora y comunicar dicha revocación a la Consejería. La retirada de la propuesta, a su parecer, no equivalía a la revocación de la declaración de idoneidad, y no podía procederse al despido inmediato por la Consejería; cosa distinta era que el obispado no la propusiera para el curso siguiente y fuera la interesada la que, si lo estimara oportuno, recurriese dicha decisión.

La controversia entre la Consejería y la diócesis se prolongó durante prácticamente la totalidad del curso académico y hubo que esperar al inicio del curso siguiente para, en efecto, no incluir a la profesora disidente entre las personas propuestas para impartir la enseñanza de la religión católica.

Contra la sentencia de instancia, que, estimando en parte la demanda, declaró la improcedencia del despido, se alzó el recurso de suplicación de la parte codemandada –la Consejería de Educación, Cultura y Universidades del Gobierno de las Islas Baleares–, que revocó la sentencia de instancia, declarando que se produjo una extinción del contrato. Al haber quedado acreditado, en efecto, que la actora «no fue propuesta por el obispado para su nombramiento o contratación como profesora de religión para el curso académico 2013-2014, la Consejería demandada procedió a darla de baja el 31 de agosto de 2013, sin que, al no haber sido propuesta, la diera de alta al día siguiente».

6.4. *Idoneidad de la enseñanza de la Religión para ser valorada como mérito académico*

El Tribunal Supremo reitera su doctrina relativa a que «la enseñanza de la religión es una experiencia docente previa que debe valorarse en la fase de concurso de los procedimientos selectivos para el acceso a cuerpos docentes no universitarios» y que «la exigencia de que esa enseñanza se produzca en especialidades del cuerpo al que se opta no es óbice para ello»³⁵.

Pronunciamientos anteriores en el mismo sentido pueden encontrarse en sentencias de 17 de julio y de 25 de septiembre de 2006: «De la regulación que le dedica el Real Decreto 2348/1994, de 16 de diciembre, por el que se regula la Enseñanza de la Religión, puede justificarse un tratamiento de la misma

³⁵ Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7ª) Sentencia de 15 de septiembre de 2014 (RJ 2014 5550).

equiparable a la de las especialidades contempladas en el mencionado apartado 1.1. Hay que tener presente, en este sentido, que el Anexo III diferencia entre sus apartados 1.1 y 1.3 no tanto en razón de la naturaleza administrativa o laboral de la relación del profesor con la Administración educativa, sino en atención a la materia objeto de la docencia que se quiere hacer valer. La distinta puntuación por curso académico (1,5 o 0,75 puntos) considerada en cada uno de ellos, obedece principalmente a que se haya enseñado en algunas de las especialidades del cuerpo al que se opta u otras distintas. Si, además, se tiene presente que los profesores de Religión no se integran en un Cuerpo funcional, siendo laboral (...) la relación que les une con la Administración, habrá que convenir en que debe primar a estos efectos la voluntad expresada por el preámbulo del Real Decreto 2348/1994 de no restringir el tratamiento de la enseñanza de la Religión como área o materia educativa con condiciones equiparables a las demás enseñanzas fundamentales».

6.5. *Reducción de jornada*

Según la Sala de suplicación, la medida de reducción de jornada era razonable «a la vista de la peculiaridad de la relación laboral y a la reducción del número de alumnos a los que sus padres solicitan les sea impartida la asignatura de religión, que no es obligatoria». La condición de liberada sindical de la actora no puede blindar la relación laboral de los avatares que puedan afectarla, como es una justificada reducción de la jornada. Termina la Sala razonando que no se aprecia concurrencia de trato discriminatorio o vulnerador del derecho a la libertad sindical de la actora. En casación se constatan las circunstancias objetivas justificativas de tal decisión, como es la reducción del número de alumnos matriculados en la asignatura de religión³⁶.

La decisión de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias sobre modificación de la plantilla del personal de religión de enseñanza secundaria, en cuanto a jornada, sueldos y, en algunos casos, destinos dio lugar a un conflicto colectivo planteado por un sindicato independiente de profesores de religión.

A los profesores de religión no les son aplicables las normas sobre modificación de jornada establecidas en el artículo 41 del Estatuto de los Trabaja-

³⁶ Tribunal Supremo (Sala de lo Social, Sección 1ª) Auto de 4 de junio de 2014 (JUR 2014 221106).

dores, por lo que la alteración sufrida no supone modificación de sus contratos. Por lo tanto, la sentencia ha dado respuesta a la alegación de que no se había seguido lo establecido en los artículos 51 y 52 c) del Estatuto de los Trabajadores, ya que si no estamos ante una modificación sustancial de condiciones de trabajo, no cabe reconocer a los trabajadores el derecho a la extinción de sus contratos con el percibo de la pertinente indemnización³⁷.

Es esta doctrina reiterada de la Sala IV del Tribunal Supremo. Valga por todas la cita de la Sentencia de 19 de julio de 2011, que resolvió el conflicto colectivo planteado por los profesores de religión católica de Andalucía con el siguiente razonamiento: «la relación laboral de los profesores de religión se rige por el Estatuto de los Trabajadores, por la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica de Educación, por el Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales de 3 de enero de 1979, suscrito entre el Estado Español y la Santa Sede, así como por los acuerdos de cooperación con otras confesiones que tienen arraigo evidente y notorio en la sociedad española y por el Real Decreto 696/2007, de 1 de junio. Aparece, por tanto, una normativa muy específica que regula el régimen jurídico de los profesores de religión y, si bien les es aplicable el Estatuto de los Trabajadores, también les resulta de aplicación la restante normativa que, en determinados extremos, como el que ahora nos ocupa, contiene una regulación diferente de la establecida en el Estatuto». Dicha regulación, concluye, no conculca el principio de jerarquía normativa.

7. LIBERTAD RELIGIOSA E IDEOLÓGICA

7.1. *Conflicto entre libertad de expresión y libertad religiosa*

Un año más se convocó en Madrid la denominada «procesión atea» el día del Jueves Santo, con recorrido y horario coincidente con las manifestaciones propias del culto católico.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid³⁸ avaló la decisión de la Delegación del Gobierno que acordó la prohibición de dicha «procesión atea» «por dos motivos esenciales: primero, por existir fundadas razones de que pudieran producirse alteraciones del orden público, con peligro para personas y

³⁷ Tribunal Supremo (Sala de lo Social, Sección 1ª) Sentencia de 25 de marzo de 2014 (RJ 2014 2540).

³⁸ Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 8ª) Sentencia de 14 de abril (JUR 2014 131280).

bienes y, segundo, porque dicho derecho encuentra un límite en el respeto al derecho de libertad religiosa ex art. 16 CE, siendo así que, en la ponderación de ambos derechos fundamentales, debe ceder en este caso el primero de ellos, aplicando además el principio de proporcionalidad de la medida acordada».

Se explicita que la apreciación de riesgo no es meramente potencial, sino que se asienta en datos y hechos reales como los que se especifican en los informes y en la resolución administrativa. En cuanto al principio de proporcionalidad, la prohibición cumple los tres parámetros aplicables según doctrina constitucional para medir el respeto a dicho principio: «se consigue el objetivo propuesto: la garantía del orden público sin peligro para personas o bienes. No existía otra medida más moderada por coincidencia de horarios, fechas y lugar (...) y, finalmente, de la misma se derivan más beneficios que perjuicios para el interés general, dada la posibilidad cierta para los actores de celebrar la reunión y manifestación en el ejercicio legítimo de su libertad de expresión en otras fechas diferentes, mientras que no es viable para los ciudadanos en general ni para los ejercientes de la religión católica en particular, la celebración de las procesiones y actos previstos para la fecha en cuestión en otro lugar o fecha».

7.2. Despido en una empresa de tendencia

La disonancia ideológica entre trabajador y el partido político en el que presta servicio profesional puede ser causa de la extinción del contrato de trabajo por despido³⁹.

Un partido político es una empresa de tendencia. Como la aceptación depende de la ideología, «su imagen –según el parecer de la Sala– es mucho más sensible que la de un empresario cualquiera, de ahí que cuando un trabajador dependiente presta sus servicios en una empresa de tendencia participando en una de las fases esenciales de creación del “producto” el deber de buena fe contractual se intensifica, da tal forma que el daño a la buena imagen de la empresa es por sí solo un incumplimiento contractual».

Con todo, para que el despido pueda tener lugar es preciso que concurren las siguientes circunstancias: «la empresa debe ser claramente una empresa de tendencia; la conducta punible del trabajador debe incidir en una

³⁹ Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo Social, Sección 3ª) Sentencia de 8 de julio (AS 2014 2461).

fase esencial o nuclear y no meramente accesoria de tal forma que la libertad de expresión del trabajador influya en la libertad de expresión e ideológica de su empresa; la conducta punible debe ser activa en el sentido de trascender al exterior la discrepancia del trabajador con la línea o actuación ideológica de su empresa; finalmente, como en todo despido disciplinario, la conducta debe ser grave». Si bien tales presupuestos concurrieron en el caso, la Sala declaró el despido improcedente –aunque no nulo– porque las declaraciones se efectuaron desde el punto de vista de la contienda política, pues tenía el contrato suspendido con su empresa y no se encontraba prestando servicios para ella y actuaba, por tanto, en un marco ajeno a su relación laboral.

7.3. *Abandono del Instituto religioso y reclamación laboral*

Alegaba la parte recurrente que la prestación de servicios como profesora de inglés en el centro propiedad de la congregación religiosa codemandada debía calificarse como una auténtica relación laboral, por lo que su cese, tras la pérdida de la condición de religiosa, sería un despido⁴⁰.

La Sala resuelve con arreglo a la doctrina sentada por el Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-administrativo, en Sentencia de 14 de mayo de 2001 y por el Tribunal Constitucional, Sentencia 63/1994, de 28 de febrero de 1994: «la relación entre religioso y comunidad no puede ser en modo alguno calificada como laboral, pues las actividades docentes realizadas por dichos religiosos no son ajenos a sus compromisos como tales, ya que la pertenencia a una comunidad religiosa, en uso de la libertad asociativa, supone la disposición a aceptar voluntaria y desinteresadamente, además de los trabajos en beneficio de la comunidad, aquellas otras tareas no genuinamente religiosas como la actividad docente, orientadas al servicio de ciertos sectores de la sociedad. Se trata de una prestación en la que está por completo ausente el interés de ganancia o de percibir una contraprestación económica».

La religiosa –añade– «no se encontraba antes de secularizarse en la misma situación que sus compañeros seglares, aunque realizase la misma actividad docente que ellos, pues su condición de religiosa de la congregación que ostentaba la titularidad del colegio constituye una nota diferencial que impli-

⁴⁰ Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Málaga (Sala de lo Social, Sección 1ª) Sentencia de 19 de diciembre (JUR 2014 45757).

ca la inexistencia de vulneración del principio de igualdad y no discriminación regulado en el artículo 14 de la Constitución Española». Por tanto, su cese en dicha actividad tras su secularización y consiguiente abandono de la congregación religiosa no puede ser considerado como un despido.

8. MATRIMONIO

8.1. *Matrimonio islámico y evangélico*

Ante la negativa al reconocimiento del derecho a la pensión de viudedad se invoca en recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional una diferencia de trato entre matrimonio canónico no inscrito y el contraído conforme al rito islámico⁴¹.

Recuerda la Sala que «no todo matrimonio contraído bajo el rito islámico tiene validez en España, sino solo aquéllos que cumplan las exigencias que fueron acordadas por el Estado español y la Comunidad islámica, reguladas en la Ley 26/1992, de 10 de noviembre. Los contrayentes en ningún momento han cumplido los mencionados requisitos de capacidad, ni con carácter previo, ni con posterioridad a la celebración de su matrimonio, motivo por el cual no puede, de conformidad con la ley española, ser considerado válido y en consecuencia producir efectos jurídicos».

No resulta posible, en conclusión, comparar la situación del recurrente ni con los matrimonios inscritos ni tampoco con los matrimonios no inscritos válidamente contraídos, por una razón clara, que no se cumple la exigencia de aportar un *tertium comparationis* válido. Su matrimonio no fue un matrimonio legítimo en los términos empleados por el art. 38 del Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril⁴².

Se discute ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña si el matrimonio contraído por el actor, oficiado ante el Pastor de la Iglesia Evangélica de Filadelfia, no inscrito en el Registro Civil, puede desplegar efectos de cara a la no revocación del subsidio de desempleo por no acreditación de las cargas familiares⁴³.

⁴¹ Tribunal Constitucional (Sala Segunda) Sentencia 194/2014 de 1 de diciembre (RTC 2014 194).

⁴² Publica el Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado (RCL 1987 1305). El artículo 38 establece las condiciones del derecho a pensión de viudedad.

⁴³ Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sala de lo Social, Sección 1ª) Sentencia de 19 de febrero (AS 2014 938).

Entiende la Sala que no estamos ante un simple problema de matrimonio religioso celebrado pero no inscrito en el Registro Civil, que sería de fácil solución con arreglo a la doctrina según la cual el matrimonio celebrado y no inscrito produce efectos civiles, salvo los que afecten a derechos adquiridos de buena fe por terceras personas. En el caso de autos, el matrimonio celebrado por el actor a finales de 2009 ante un ministro de culto religioso de la Iglesia de Filadelfia «no cumplió con los requisitos legales necesarios para que puedan serle reconocidos plenos efectos civiles, pues no es sólo que no esté inscrito en el Registro Civil, sino también que el consentimiento no se prestó ante dos testigos mayores de edad, ni se tramitó el expediente previo al matrimonio ante el encargado del Registro Civil correspondiente, a fin de que el encargado pudiera expedir certificación acreditativa de la capacidad matrimonial de ambos contrayentes. La inobservancia de estos requisitos básicos previstos en la citada Ley 24/1992 (art. 7) impide que el matrimonio pueda desplegar efectos civiles».

8.2. *Matrimonio de conveniencia*

Ante la Audiencia Provincial de Córdoba⁴⁴ se acreditó que la certificación de la Iglesia que permitió la inscripción del matrimonio celebrado en forma religiosa (art. 63 CC) no respondía a la realidad, al ser falsa, «por lo que no puede permitirse que el Registro Civil contenga una inscripción de un matrimonio que no ha existido. La inscripción del matrimonio en el Registro Civil no tiene carácter constitutivo; los efectos constitutivos son por la celebración del matrimonio entre las partes, que en este caso no ha existido. Corresponde dejar sin efecto la inscripción».

9. CUESTIONES PENALES

El acusado se dirigió a una Iglesia y, movido por el ánimo de obtener un lucro ilícito, sustrajo una cajita plateada que contenía las llaves del sagrario⁴⁵. Asimismo, comenzó a proferir gritos contra las personas que se encontraban en el interior del templo, esperando la celebración de la Eucaristía, solicitándose la presencia de la Policía, la que encontró en poder del acusado la cajita que previamente había sustraído.

⁴⁴ Audiencia Provincial de Córdoba (Sección 1ª) Sentencia de 7 de mayo (JUR 2014 191521).

⁴⁵ Audiencia Provincial de Albacete (Sección 1ª) Sentencia de 22 de enero (JUR 2014 64967).

Los hechos objeto de las actuaciones «son subsumibles –según el parecer de la Audiencia– en el tipo del artículo 523 Código penal –impedir, interrumpir, perturbar los actos, funciones, ceremonias o manifestaciones de las confesiones religiosas–, ya que el acusado, unas veces valiéndose de una actitud amenazante y otras empleando las vías de hecho, se dedicó durante un largo periodo de tiempo a interrumpir o a perturbar el normal desarrollo de las celebraciones religiosas que tenían lugar en la parroquia, siendo por otra parte un hecho notorio que la Iglesia Católica, a la que pertenece el mencionado templo, es una de las reconocidas por nuestro ordenamiento jurídico».

El acusado tenía alteradas sus facultades pero no se encontraba privado de ellas completamente, ni tampoco en medida tan elevada como para considerar apreciable una eximente incompleta. Se impuso la pena correspondiente por el delito del art. 523 del Código penal.

10. TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS

En 2014 hay que destacar dos importantes sentencias de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La primera dictada en el asunto *Fernández Martínez contra España*⁴⁶, de la que ya he dado cuenta en la sección de esta crónica correspondiente a los profesores de religión. No se produjo violación de los artículos 8, 9, 10 y 14 del Convenio por la no renovación del contrato de profesor de religión que perdió la idoneidad para el puesto. La decisión de la autoridad eclesiástica respondió a razones estrictamente religiosas sobre las que el Estado –en virtud del principio de neutralidad– no se pronuncia.

En el asunto *S.A.S. contra Francia*⁴⁷ el Tribunal respalda la legislación francesa vigente sobre la prohibición del uso del velo islámico integral en los espacios públicos. La injerencia está prevista por la ley, se ordena al objetivo legítimo de garantizar las condiciones de convivencia y resulta proporcional.

A las anteriores –que son las más relevantes dentro de la materia objeto de nuestro estudio– puede añadirse la dictada en el asunto *Hämäläinen contra Finlandia*, según la cual la prohibición de que un transexual contraiga matrimonio con una mujer no contradice lo dispuesto en el Convenio (artículos 8, 12 y 14)⁴⁸.

⁴⁶ Gran Sala. Sentencia de 12 de junio de 2014 (TEDH 2014 35).

⁴⁷ Gran Sala. Sentencia de 1 de julio de 2014 (TEDH 2014 36).

⁴⁸ Gran Sala. Sentencia de 16 de julio de 2014 (TEDH 2014 50).

Las sentencias de las salas, por su parte, pueden agruparse en torno a las siguientes temáticas:

– Obstaculización de las prácticas de culto

*Asunto Krupko y otros contra Rusia*⁴⁹ (interrupción de servicios religiosos y detención de los participantes. La ilegalidad de la reunión no justifica la intervención de la policía. Violación del artículo 9 del Convenio).

*Asunto Güler y Ugur contra Turquía*⁵⁰ (condena penal de los participantes en ceremonia religiosa en memoria de fallecidos de organización terrorista. Violación del artículo 9 del Convenio).

*Asunto Begbeluri y otros contra Georgia*⁵¹ (violencia y acoso por motivos religiosos e inactividad de las autoridades. Por segunda vez el TEDH se pronuncia contra la República de Georgia por no impedir la violencia contra los Testigos de Jehová: «las autoridades de Georgia crearon un ambiente de impunidad que terminó propiciando otros ataques contra los testigos de Jehová en todo el país». Violación del artículo 9 del Convenio).

– Obstaculización de las actividades de las entidades religiosas

*Asunto Asociación Islam-Ittihad y otros contra Azerbaiyán*⁵² (disolución de una asociación por desarrollar actividades religiosas: reparación y mantenimiento de mezquitas y participación en proyectos destinados a promover el respeto de los derechos humanos. Violación del artículo 11 del Convenio).

*Asunto Centro Bíblico de la República Chuvash contra Rusia*⁵³ (disolución de una organización religiosa por llevar a cabo actividades educativas y cierre del centro perteneciente a una iglesia pentecostal por falta de licencia. Violación del artículo 9 del Convenio en relación con el artículo 11).

*Asunto Iglesia de la Cienciología de San Petersburgo y otros contra Rusia*⁵⁴ (denegación de inscripción registral como confesión religiosa reconocida. Violación del artículo 9 del Convenio en relación con el artículo 11).

⁴⁹ Sentencia de 26 de junio de 2014 (JUR 2014 176903).

⁵⁰ Sentencia de 2 de diciembre de 2014.

⁵¹ Sentencia de 7 de octubre de 2014 (JUR 2014 252025).

⁵² Sentencia de 13 de noviembre de 2014 (JUR 2014 271490).

⁵³ Sentencia de 12 de junio de 2014 (TEDH 2014 41).

⁵⁴ Sentencia de 2 de octubre de 2014 (JUR 2014 247400).

– Objeción de conciencia al servicio militar

*Asunto Buldu y otros contra Turquía*⁵⁵ (existencia de procesos penales consecutivos con acumulación de condenas. Medidas desproporcionadas para asegurar el cumplimiento del servicio militar. Violación del artículo 9 del Convenio).

– Cuestiones fiscales

*Asunto Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días contra Reino Unido*⁵⁶ (denegación de exención fiscal por donativos a comunidad religiosa. Violación inexistente).

*Asunto Cumburiyetci, Egitim ve Kültür Merkezi Vafki contra Turquía*⁵⁷ (denegación a la comunidad alevi de la exención del pago de la electricidad al no ser considerados sus centros lugares de culto. Violación existente del artículo 14 en relación con al artículo 9).

– Lugares de culto

*Asunto Sociedad Anónima del Ucieza contra España*⁵⁸ (inmatriculación por parte de la Iglesia de lugar de culto ubicado en propiedad inscrita. Violación existente del artículo 6 § 1 y del artículo 1 del Protocolo número 1).

– Enseñanza

*Asunto Mansur Yalcin y otros contra Turquía*⁵⁹ (derecho de los padres a la educación religiosa de sus hijos. Falta de objetividad en la docencia de la disciplina obligatoria de formación religiosa; el contenido de las clases de religión y ética se basaba en la interpretación del Islam sunita. Limitadas posibilidades de exención para los estudiantes pertenecientes a la confesión alevi. Violación del artículo 2 del Protocolo número 1 del Convenio).

⁵⁵ Sentencia de 3 de junio de 2014 (JUR 2014 161908).

⁵⁶ Sentencia de 4 de marzo de 2014 (JUR 2014 64316).

⁵⁷ Sentencia de 2 de diciembre de 2014 (TEDH 2014 94).

⁵⁸ Sentencia de 4 de noviembre de 2014 (TEDH 2014 74).

⁵⁹ Sentencia de 16 de septiembre de 2014 (JUR 2014 227318).

– Revelación de las creencias

*Asunto Dimitras y Gilbert contra Grecia*⁶⁰ (obligación de revelar las creencias al exigir la prestación de juramento para participar como testigo en un proceso judicial. Violación de los artículos 9 y 13 del Convenio).

– Abusos sexuales

*Asunto Peltureau-Villeneuve contra Suiza*⁶¹ (falta de respeto de la presunción de inocencia. Violación del artículo 6 § 2 del Convenio).

⁶⁰ Sentencia de 2 de octubre de 2014 (JUR 2014 247404).

⁶¹ Sentencia de 21 de octubre de 2014 (JUR 2014 265549).